

Iquique, doce de abril de dos mil veinticuatro.

**VISTO Y OÍDO:**

En los autos Rol IC 8-2024, RUC 2000243337-1, RIT 510-2023, los abogados sres., José López Pinto, y Cristian Olate Orellana, defensores penales privados, recurren de nulidad en contra de la sentencia dictada el cinco de diciembre pasado, por una Sala del Tribunal Oral Penal de Iquique, conformada por los Jueces, titulares, sres. Franco Repetto Contreras, y Juan Pozo Araya, y suplente sr. Carlos Perasso Adunce, que condena a Ricardo Salazar Tarriba, y a Yolanda Salazar Tarriba, a sufrir, cada uno, la pena corporal efectiva de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a la pena pecuniaria de multa equivalente a cuarenta unidades tributarias mensuales, en calidad de autores de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley 20.000, en relación a su artículo 1, cometido entre los días 28 de octubre de 2020 y 5 de febrero de 2021, en las regiones de Tarapacá y Valparaíso.

Asimismo, la sentencia condena a Ricardo Salazar Tarriba, a sufrir la pena corporal efectiva de quince años de presidio mayor en su grado medio, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito de asociación ilícita para traficar drogas, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 16 de la Ley 20.000, sorprendido el 10 de marzo de 2021 en la ciudad de Santiago; y a Yolanda Salazar Tarriba, la condena a sufrir la pena corporal efectiva de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta



para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autora del delito de asociación ilícita para traficar drogas, previsto y sancionado en el numeral 2 del artículo 16 de la Ley 20.000, pesquisado el 10 de marzo de 2021 en la ciudad de Santiago.

Por último, el fallo también impone la pena de comiso respecto de las especies incautadas, detalladas en su considerando vigésimo.

**TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** El abogado sr. López, por el sentenciado Ricardo Salazar, formula en contra del fallo causal de nulidad del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por estimar que se produjo, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, una infracción sustancial de los derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, en particular el debido proceso, que vincula con el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 4 del Código Procesal Penal, y, explicando lo que en doctrina se entiende por debido proceso, sostiene que el tribunal debe formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, resguardándose el principio de inocencia, que sólo puede ser derrotado en atención a una convicción probatoria que supere el estándar más allá de toda duda razonable.

Luego el abogado discurre sobre diversas formas de afectar el debido proceso, y hablando sobre la parcialidad del juez, indica que uno de los jueces del juicio concurrió como Juez de garantía del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio durante el proceso de investigación, menciona que operó una causal de implicancia porque ese juez actuó en una audiencia de reformatización, señalando que asumió la defensa cuando estaba fijada la fecha de juicio, y los hechos



descritos los supo por su representado luego de varios días de iniciado el juicio oral, de manera que no estaba habilitado para revisar la causa en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, de suerte que, confiando en las instituciones, era deber del juez haberse inhabilitado de oficio, además que el Juez Presidente no dio la oportunidad de efectuar alegaciones y su parte no conoce a los jueces de Iquique; alegando además que nunca se le consultó a la defensa si estaba de acuerdo con la incorporación de los documentos en la forma realizada por el tribunal, por lo que la dirección del juicio siempre fue parcial, en apoyo a las pretensiones del Ministerio público y por tanto también se vulneró el debido proceso, pidiendo finalmente se anule el juicio y se disponga la realización de un nuevo juicio por un tribunal no inhabilitado.

**SEGUNDO:** El abogado luego opone la causal subsidiaria del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 11 N° 9, 68 y 69 del Código Penal, y en general, de las reglas de determinación de pena, porque se desestimó la minorante señalada, incurriéndose en un error de derecho en la aplicación del artículo 68 del Código Penal, ya que es posible concebir que la declaración de un acusado puede constituir una colaboración con el esclarecimiento de los hechos sin que necesariamente constituya una confesión de su parte, pero, a contrario sensu, si además de colaborar con el esclarecimiento de los hechos es en sí una confesión de los mismos se está en presencia de una condición relevante y vital que debe ser premiada, declarándose que la atenuante concurre, lo que ocurrió en la causa porque los dichos de su representado coadyuvaron a aclarar el alcance de su participación, y la real intervención de su conducta en estos hechos, especificando todos los aspectos, de manera que al concurrir una circunstancia atenuante, y ninguna agravante, está impedido el juez de imponer la pena en su grado máximo, y al concurrir dos atenuantes y ninguna agravante, el juez debe rebajar la pena al menos en un grado, razones por las que pide



se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que reconozca la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, condenando a su representado conforme a la ley.

**TERCERO:** Nuevamente en subsidio, el abogado plantea causal de nulidad del artículo 374 letra e), en relación al artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal, respecto del delito de asociación ilícita, debido a una errónea valoración y argumentación respecto de la apreciación de la prueba, lo que estima constituye ausencia de valoración razonable o argumentación razonable, y por tanto, omisión.

En cuanto a esta causal, el abogado recurrente comienza con una cita doctrinaria, copia larga, extensa y completamente considerandos del fallo, noveno, sexto, séptimo, octavo, y luego sostiene que el Tribunal ha señalado reiteradamente que pudo apreciar la corroboración necesaria de los medios de prueba que le permitieron llegar a la conclusión de condenar al encartado, pero ello no es así porque “... *A NADIE LE LLAMA LA ATENCION QUE SIN LA INTERVENCION DE LOS AGENTES REVELADORES ESTOS DELITOS NO POBRIAN HABERSE LLAVO A CABO*”, y citando a un autor, afirma que los considerandos de la sentencia carecen de justificación externa, ya que no se ha dado cabal cumplimiento a la obligación de valorar la prueba dentro de los límites de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados; y el respeto a los principios in dubio pro reo y ultima ratio, por lo que solicita se anule la sentencia y el juicio, y se disponga la realización de uno nuevo por tribunal hábil.

**CUARTO:** Tratándose del abogado sr. Olate, obrando por Yolanda Salazar, deduce causales de nulidad principal, y subsidiarias, respectivamente, de los artículos 373 letra a), 374 letra a), 374 letra e), 373 letra b) y 373 letra b), todos del Código Procesal Penal.

En cuanto al primer motivo de nulidad, también invoca la vulneración del debido proceso en los mismos términos que el



abogado López, cita idénticas normas, para alegar que obró en la causa un juez legalmente implicado, porque se infringió las formalidades para rendir prueba, porque la condena no contempló la perspectiva de género, porque se vulneró el principio de inocencia, y porque se invirtió la carga de la prueba, alegando que mucha de la prueba documental acompañada por el persecutor se incorporó sin resguardo de mandato legal, pues antes de ser incorporada fue exhibida al testigo principal que depuso en juicio, sin cumplir el mandato que indicaba que esa prueba debió haber sido incorporada previamente mediante la lectura para luego ser exhibida al testigo, pero lo que ocurrió fue que se le exhibía el testigo, y éste la leía directamente desde la pantalla en la cual estaba siendo reproducida, y no faltó la oportunidad en que el persecutor le destacó los párrafos que quería que leyera, siendo que no se estaba frente al ejercicio contemplado en el artículo 332, vicios que fueron advertidos por su parte, pero no fue oído, además que se incorporaron documentos con lectura resumida sin acuerdo previo de las partes, lo que demuestra que la dirección del juicio siempre fue parcial.

Dice también que respecto a la prueba testimonial, las defensas tuvieron que hacer un acto de fe sobre quien efectivamente estaba prestando declaración era el agente encubierto Roberto, pues nunca tuvieron acceso a poder revisar las dependencias del tribunal con el objeto de poder determinar si se cumplían los requisitos básicos para la forma en la cual el agente prestó declaración, lo único que escucharon durante todos los días en que prestó declaración fue su voz, y si bien no era necesario ver su rostro, al menos pudieron haber visto su contextura para saber si era la misma persona que declaró todos los días, y nunca se consultó si estaban de acuerdo en ello; y, debió invalidarse la testimonial del agente español Germán Aparisi, pues cuando estaba deponiendo, en más de un momento conversaba



con una persona que después se les indicó que era un Fiscal español, y una vez más tuvieron que hacer acto de fe al respecto.

Más adelante el abogado sigue controvirtiendo toda las probanzas rendidas, diciendo “....*Perdió completamente el sentido de objetividad el ente persecutor al retirar mucha prueba con la cual esta defensa podría haber controvertido la prueba que efectivamente presentó, a saber por ejemplo retiró al informante encubierto 12 llamado Manuel que podría de una u otra forma haber contradicho las palabras o la declaración de la gente en cubierto Roberto sobre todo en aquello que dice relación con los recibos de dineros y las transacciones de drogas que se hicieron de este tema la sentencia de marras no se hace cargo ni cuestiona el hecho de que el Ministerio público básicamente haya probado con un testigo su pretensión punitiva y no haya hecho cuestionamiento a muchísimos dichos del agente Roberto como tampoco hace cuestión al hecho de que ingresaron al Instituto de Salud pública 56 paquetes con droga cada uno pesando alrededor de 1 kg y solo se acompañaron 8 protocolos de droga, relativos a 8 paquetes, cuestión que hizo ver esta defensa, es más instó al sentenciador a que debiese hacerse una denuncia penal porque entendemos que si faltan más de 48 paquetes de droga debió haberse denunciado estos hechos para que se inicie una investigación como así corresponde.*

*Por último importante es destacar que en esta investigación se tuvo conocimiento de que también en países como España Francia y Países Bajos hubo investigaciones a este respecto pero como el ente persecutor perdió todo sentido de objetividad no informó ni acompañó ningún documento al tribunal que diera cuenta de que esas investigaciones resultaron sin personas detenidas y que los encartados nunca fueron objeto de investigación ni se despachó respecto de ello alguna orden de investigar o alguna orden de aprehensión por tanto esas investigaciones no resultaban importantes*





*para el persecutor a fin de fundamentar su pretensión punitiva pero sí lo era para la defensa en cuanto a asentar definitivamente que en esta causa no existe ninguna asociación ilícita para el tráfico de drogas.”.*

Argumenta que con esa espuria prueba el persecutor, avalado por el tribunal, probó que su representada traficaba drogas y formaba parte de una asociación ilícita, pero esa prueba no tiene corroboración alguna en los hechos pues no tiene ninguna otra que la sostenga, obviándose la declaración del agente Roberto que indicó que ella no tuvo participación alguna porque no vivía ni estaba en Chile y además no pudo ejecutar el verbo rector de poseer, si toda la droga estaba en manos de la policía, menos de transportar, fundada en que precisamente la droga estaba en manos de la policía.

Continúa diciendo que se produjo la vulneración del debido proceso, volviendo a reiterar sus alegaciones, esta vez, desde la perspectiva de la falta de corroboración de los delitos, refiriéndose de nuevo a las probanzas rendidas, diciendo que a su representada se le condena por la ejecución de los verbos rectores de posesión y transporte de drogas que era imposible ejecutar pues esa droga estaba en posesión de la policía, repitiendo sus dichos, refiriéndose también a las expresiones de un policía.

Más adelante expresa que la sentencia escrita, remitida a sus correos electrónicos, no está desarrollada de manera íntegra respecto de todo lo que se alegó en juicio, dice que hay varias cosas dichas por las defensas que no están plasmadas en el papel y la sentencia que se remitió no es la copia de un acta, por tanto debe venir íntegra, dirigiéndose luego a otra alegación, cual es que parte de la prueba del ministerio público proviene de un accionar ilícito, toda vez que al vaciarse en los teléfonos celulares a lo menos en lo que dice relación con su representada se obtuvo información de una aplicación denominada whatsapp, aplicación está asociada a un número telefónico mexicano, necesitándose autorización especial.



Sobre la perspectiva de género dice que el tribunal olvidó que su defendida es una mujer de más de 60 años, que se vio rodeada de a lo menos 9 agentes encubiertos que la vigilaron constantemente, la siguieron, tenían interceptado su teléfono y por ende sabían con quién hablaba, con quién se juntaba, y a qué lugares iba, y, citando diferentes normas, dice que se violentaron los derechos humanos de Yolanda Salazar, ya que al trasladarse a Chile a cuidar a su hermano gravemente enfermo se vió involucrada en una situación delictiva que hoy la tiene condenada a 18 años de presidio.

En cuanto al principio de inocencia vuelve a repetir la discusión que plantea sobre las probanzas, forma de rendirse, sosteniendo al concluir que su representada debiese ser absuelta, y/o, a lo más buscar una forma de participación distinta a lo señalado en la sentencia, esto es, discutir una conducta que pueda someterse a lo descrito en el artículo 17 de la Ley 20.000, conspiración para el tráfico, pidiendo que se anule el juicio y la sentencia, y se retrotraiga el procedimiento al estado de celebrarse un nuevo juicio oral por un tribunal no inhabilitado.

**QUINTO:** En lo tocante a los restantes motivos de nulidad, discurre sobre la integración del tribunal por un juez legalmente implicado en los mismos términos que el abogado sr. López, pidiendo que se anule el juicio y la sentencia, retrotrayéndose el procedimiento al estado de celebrarse un nuevo juicio oral por un tribunal no inhabilitado.

También argumenta que en la sentencia se ha omitido la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables a los acusados, así como la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo cuerpo legal, así como también las razones legales o doctrinales que sirvieron para calificar





jurídicamente cada uno de los hechos y circunstancias, diciendo que en los considerandos noveno, décimo y undécimo no se cumple con tal deber, explicando que el delito respecto de su representada era imposible, amén de no existir prueba, indicando varios aspectos para demostrar sus aseveraciones, cuales son:

*“PRIMERO: Si mi representada pertenecía el cartel de Sinaloa, y se le paso un teléfono intervenido, era seguida constantemente, sus conversaciones fueron grabadas y sus teléfonos luego de su detención fueron vaciados, aun de manera ilegal, pues su aplicación de WhatsApp estaba vinculada a un número mexicano, por lo tanto no había autorización para su revisión, pero de todas formas se hizo, aun así no tiene ninguna conversación ni forma de contacto con ninguna persona que no fueran los agentes encubiertos, su hermano y su hijo, con nadie más hablo mientras estuvo en libertad en Chile, no le rindió cuentas a nadie, no le envió dinero a nadie, o recibió dinero del extranjero, o tiene un mensaje de voz, de texto etc, de nadie de fuera del país. Entonces como puede ser la enviada del cartel sino tiene contacto con nadie, cuestión que la prueba del persecutor con pudo sostener y que el tribunal ignora sin más.*

*SEGUNDO: La prueba de cargo dice que los supuestos miembros del cartel de Sinaloa se comunicaban a través de comunicaciones encriptadas en plataformas pagadas como lo eran ENCROCHAT Y SKYECC, mi representada bajo la aplicación SKYECC a fines de enero de 2021, pero según consta del vaciado del teléfono no fue ocupada nunca y descarga la aplicación cuando ya el supuesto envío de droga estaba casi lista para ser despachado, lo cual ocurrió a principios de febrero, digo supuesto porque nunca se envió la droga. Ahora ENCROCHAT había dejado de funcionar en junio del 2020, cuando ni siquiera Ricardo Salazar tenía pensado venir a Chile.*



*TERCERO: En la presente causa y a raíz de investigaciones que se llevaron a cabo en Países Bajos, Francia y España, fueron muchas personas investigadas, más ninguna de esas personas fue doña Yolanda, no fue sujeto de interés criminalístico para ninguna de esas policías ni para Europol. No fue investigada ni por tráfico de drogas, ni por asociación ilícita ni por estar vinculada a delitos que se relacionaron con las plataformas de comunicación antes dichas. La única noticia que tuvieron de ella fue en España por referencias que les hizo la propia PDI por la investigación chilena, pues de lo contrario no habrían sabido de su existencia, y cualquier dato referente a su persona obviamente lo podían obtener de la comunidad europea, pues ella vivió más de 15 años en Europa de manera legal y nunca fue requerida judicialmente.*

*CUARTO: No existió en el juicio de marras ninguna prueba de ningún tipo que diera cuenta que doña Yolanda realizó actividades de control, de mando, de subordinación a un mando superior, que cumplió un rol determinado, que ha colaborado de manera directa e inmediata en la consecución de algún delito de tráfico y que ello haya sido permanente en el tiempo, menos el desarrollo de alguna actividad que diera cuenta de una convicción y sentimiento arraigado de pertenecer a alguna agrupación delictiva.*

*QUINTO: Como se expresó más arriba, no hay datos ni indicios probatorias que den cuenta que la encartada haya llevado a cabo actividades de tráfico, por ende de no existir delito base no hay delito asociativo.*

*SEXTO: En toda la prueba aportada por el persecutor que dice relación con la mensajerita encriptada de SKYECC nunca, jamás fue mencionada doña YOLANDA, ni se mencionó a ninguna mujer, ni se habló de una tía, sobrina, mama, hermana, Yola, Yolanda, señora, mujer, doña, ninguna palabra que diera cuenta que había alguna referencia a alguna mujer, es mas contrainterrogado el AER40*



*Roberto indico que a él le parecía que todas las conversaciones fueron entre hombres, lo cual de una u otra forma a lo menos genera duda respecto de la participación de la encartada, una duda más que razonable.*

*SEPTIMO: El fin definitivo del tráfico de drogas y la supuesta organización delictiva para ello, dice relación con las ganancias monetarias, cuestión que fue obviada por el persecutor y que según la prueba de cargo no se llevó a cabo diligencias tendientes a ello. No obstante ser ciudadana mexicana mi representada, no se dirigió ningún oficio a las autoridades de su país para recabar alguna información y más aun teniendo contacto directo con las fiscalías europea jamás se les consulto algo en ese orden de ideas, es decir, el hito más importante del tráfico de drogas y de la asociación ilícita es la consecución de riquezas no fue investigado por el persecutor.”.*

Continúa el abogado argumentando en el mismo sentido, concluyendo con la afirmación de que la prueba no aparece corroborada por evidencia externa que la haga verosímil, lo que conlleva a inferir que los hechos que el tribunal tuvo por establecidos para acreditar el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, en lo que se refiere a la permanencia de esa organización en el tiempo y la supuesta intervención de la asociación en procedimientos anteriores de internación de drogas, no tiene un correlato claro, lógico y completo en su exposición, lo que trasgrede el requisito del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, antes referido, configurándose así -en lo que a este delito se refiere- la causal del artículo 374 letra e) del mismo cuerpo legal, motivo bastante para acoger el recurso en su causal principal, pidiendo se acoja el recurso, se invalide la sentencia y juicio, y se disponga la realización de un nuevo juicio por tribunal hábil.

**SEXTO:** La causal de nulidad de la letra b) del artículo 373 se sustenta en que a su representada se atribuyen dos verbos rectores, equivocándose el tribunal porque ella llegó a Chile el 15 de diciembre



de 2020, cuando las internaciones de droga ya se habían realizado y estaban en poder de los agentes encubiertos, por lo tanto le era imposible realizar el verbo activo de poseer droga pues estaba en manos de la policía, pretendiéndose además que ella estaba vinculada al cartel de Sinaloa, y la única evidencia de ello es solo el hecho de que vivía en Culiacán, Sinaloa, y esta circunstancia no es un antecedente suficiente para enrolarla en dicho cartel, y si bien es cierto que hubo una arista investigativa que dice relación con tres países, España, Países Bajos, y Francia, en ninguno de ellos su representada fue investigada, requerida, o se le despachó alguna orden de captura internacional, nunca fue sujeto de interés y las noticias que se tuvieron de ella fue solamente en España a propósito de información que le entregó la propia Policía de Investigaciones de Chile, y lo único que ella hizo fue cooperar con el cuidado de la salud de su hermano que fue operado del corazón, lo cual le llevó la mayor cantidad de tiempo mientras estuvo libre, por lo que cree que su participación no se encuentra en el artículo 15 número 1 del Código Penal, sino más bien, como expresó en los alegatos, en una figura penal diversa a la de autor, y por eso propuso discutir una participación en los términos del artículo 17 de la Ley 20.000, conspiración para cometer tráfico de drogas.

Y, en cuanto a la asociación ilícita, luego de copiar doctrina y jurisprudencia, afirma que no está acreditado que en esta supuesta organización concurrieran los requisitos de férrea disciplina de sus miembros, y su intercambio, por lo que debieron haber sido absueltos de la imputación penal por este delito, pidiendo se invalide la sentencia, y se retrotraiga el procedimiento al estado de celebrarse un nuevo juicio oral por un tribunal oral no inhabilitado.

**SÉPTIMO:** La última causal de nulidad, también del artículo 373 letra b), se sustenta en que en el considerando sobre determinación de la pena, el tribunal dice que la pena asignada al delito de tráfico ilícito



de estupefacientes es la de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales, y al concurrir una atenuante de responsabilidad penal, el tribunal está impedido de imponer la pena en su grado máximo, razón por la cual la fijará en presidio mayor en su grado mínimo y, dentro del grado, la impondrá en un nivel intermedio, ya que si bien sólo se trató de poco más de 56 kilos de clorhidrato de cocaína, no es menos cierto que la organización pretendía trasladar seis toneladas de droga desde Chile hacia Europa, expresando que resulta inentendible *“....como un tribunal puede justificar la existencia de 56 kilos de droga sin todos los protocolos de análisis químico. A este respecto es necesario decir que los 56 kilos están contenidos en 56 paquetes, los que supuestamente fueron entregados al ente que realiza los análisis químicos de la droga y que se contienen en un protocolo, se olvidó parece el tribunal que solo se acompañaron 8 protocolos, que se condice por tanto con solo 8 kilos de droga y no con 56, por algo este defensor le dijo a SS. en la clausura que estábamos en presencia de un delito y que tenía la obligación de denunciar. Ahora las condenas se basan en supuestos facticos para condenar y no en supuestos.”*.

Y respecto de la pena por el delito de asociación ilícita, se funda en argumentos falsos, que no fueron comprobados en juicio, preguntándose el abogado cuál era la peligrosidad, ya que no se les incautaron armas, grandes sumas de dinero, no mataron, ni amenazaron a nadie, nada propio de una supuesta organización criminal, haciendo hincapié en que el bien jurídico protegido no se alcanzó a conculcar, por ello estima que *“....es del todo justo para determinar la cuantía de la pena hacer oídos a estas consideraciones, pues ello podría haber determinado que las penas para la encartada en cuanto a su quantum se deberían haber aplicado en su rango más bajo, esto es en la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, para cada delito. Otra cosa es la cantidad de droga a*



*que aduce la sentencia, lo cual no es un dato decidor a la hora de otorgar una atenuante. Maxime si hay controversia en las cantidades de drogas analizadas, aunque SS. no lo quiera ver es así.”, pidiendo se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, se sancione a su defendida a dos penas de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.*

**OCTAVO:** En la audiencia de vista de los recursos, los partes recurrentes insistieron en sus alegaciones, y la contraparte pidió fueran desestimadas.

**NOVENO:** Para resolver, previamente se precisarán dos cuestiones.

La primera radica en que, como se advierte del resumen de ambos libelos, éstos, además de ser francamente extensos, repetitivos, y a ratos claramente confusos, al mezclarse argumentaciones que no se condicen con la causal correspondiente, son semejantes, motivo por el cual se razonarán conjuntamente.

La segunda apunta a la causal inicial de ambos recursos, 373 letra a) del Código Procesal Penal, que la Excma. Corte Suprema, por resolución de 2 de enero pasado, decidió que debían ser conocidas y resueltas por esta Corte.

**DÉCIMO:** Dicho así, los recursos se desestimarán.

Desde luego deben rechazarse las causales relacionadas con la implicancia de un juez, que la Excma. Corte Suprema recondujo a esta Corte, porque siendo el recurso de que se trata, extraordinario, de derecho estricto, escrito, y fundado, no resulta posible entender que se encuentre debidamente planteada una causal en que no se especifica qué juez, de qué tribunal, si del Juzgado de Garantía de Iquique, o del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Alto Hospicio, habría intervenido en algún tipo de audiencia, y que luego se habría desempeñado como integrante de la Sala que conoció del presente





juicio, sin que se hubiere ofrecido y aportado prueba alguna de la causal, circunstancia que le resta entidad, seriedad y verosimilitud.

**UNDECIMO:** Por otro lado, si el debido proceso es un principio jurídico procesal que reconoce a las personas el derecho a garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo del proceso, tales como ser oído y expresar sus pretensiones; si la igualdad de armas, implícita en el concepto del debido proceso, importa la existencia de un equilibrio procesal entre las partes, respecto de oportunidades, facultades y derechos procedimentales; si el derecho a defensa consiste en la posibilidad de protegerse ante un tribunal de justicia de las imputaciones que un tercero le formule, con absoluta igualdad e independencia, para evitar los desequilibrios procesales y la indefensión; si la imparcialidad supone que el juez carezca de interés en el objeto del juicio y en su resultado, debiendo obrar conforme a parámetros objetivos; y si la no discriminación, desde una perspectiva amplia y respecto del quehacer del juez, es la garantía que debe brindar a toda persona, para el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, no se divisa cómo cada uno de estos principios y derechos pudieren haberse visto afectados simplemente porque los acusados estuvieron siempre presentes en el juicio, contaron con asesoría letrada y remunerada, lo cual supone necesariamente que los apoderados debieron imponerse de todos los antecedentes del procedimiento antes del inicio del juicio, o desde que asumieran las defensas.

**DUODÉCIMO:** En el mismo sentido, las alegaciones de dirección parcial del juicio, de incorporación inadecuada de la documental, de declaraciones de testigos cuyas identidades no pudieron ser conocidas, ni siquiera su contextura física, no resisten análisis, no sólo porque se trató de testigos reservados, pero, fundamentalmente, porque, al igual que la situación anterior, si las defensas estimaron ver



perjudicado su quehacer por un comportamiento impropio del juez presidente, o de toda la sala, debieron formular las incidencias pertinentes, y ofrecer a esta Corte las respectivas probanzas en ese sentido, lo que no hicieron, de suerte que las alegaciones carecen de basamento.

**DÉCIMO TERCERO:** En cuanto a la ausencia de consideración de la perspectiva de género respecto de la sentenciada Salazar porque tendría 60 o 61 años, debe señalarse para su rechazo que, pese a que la perspectiva de género propone la identificación y análisis crítico de las diferencias sociales y culturales de una sociedad o grupo humano, construidas en base a la diferencia sexual, enfoque que puede aplicarse en diferentes ámbitos, como el de la justicia, en caso alguno significa que, por la sola circunstancia de ser mujer, una persona puede librarse de una imputación penal, o recibir una sanción menor a la objetivamente correspondiente a un ilícito, más bien lo que se persigue es la identificación de supuestos discriminatorios, que importen desigualdad o exclusión de las mujeres en la situación de que se trate, lo que en la especie no se observa.

**DÉCIMO CUARTO:** Sobre la falta de desarrollo de la sentencia, para obviar ese comentario, ya que no se puede llamar de otro modo, basta decir que de la lectura de la sentencia aparece nítidamente un desarrollo armónico, adecuado, y completo de las imputaciones penales, actividad de las partes, probanzas, hechos establecidos, delitos acreditados, y sanciones aplicables.

**DÉCIMO QUINTO:** Hasta esta parte podría decirse que se ha resuelto todas las alegaciones genéricas, que más bien presentan las características del recurso ordinario de apelación, cuya improcedencia, bien saben los abogados defensores, está determinada por la legislación procesal penal en términos generales.

**DÉCIMO SEXTO:** Ahora bien, tratándose de las argumentaciones sobre errada valoración de la prueba, equívoco al



atribuirse delitos de asociación ilícita, ausencia de presupuestos de este delito, sanción más elevada de la que corresponde conforme al artículo 69, y rechazo de la minorante del numeral 9 del artículo 11, ambas normas del Código Punitivo, ocurrirá lo propio.

**DÉCIMO SEPTIMO:** En efecto, si consideramos que el presente es un recurso de derecho estricto porque persigue la invalidación, que, conforme a las reglas generales, no es más que la nulidad de un resuelto por causas ajenas a la voluntad del que la alega, en la medida que no exista otra posibilidad de remediar el defecto, el uso del medio de impugnación debe ser justificado, y en el presente caso no lo es porque, aun cuando se hayan planteado causales principales y subsidiarias unas de otras, no es posible alegar tan pronto que los ilícitos no están acreditados, para luego pedir se rebajen las penas, o incluso, como en el caso del sr. Olate, proponer se considere la existencia de un delito diverso.

En otras palabras, si se alega una desacertada apreciación y valoración de los elementos de prueba, no es factible luego aceptar esa determinación, pero discutir la sanción, porque la causal de infracción de ley supone ausencia de discusión respecto de los acontecimientos y debate acerca del derecho, es decir, si se pretende alegar un despropósito jurídico, o sea, una cuestión de derecho, no le está permitido al recurrente discutir los hechos asentados.

**DÉCIMO OCTAVO:** Ahora bien, si pudiera obviarse lo anterior, y si se deseaba, como parece, obtener una revisión y valoración de todos los elementos probatorios para lograr una convicción diversa, la causal que pudiera permitir a esta Corte practicar un segundo examen de las piezas controvertidas procedería únicamente si se constatará una infracción grosera o patente a la regla probatoria, toda vez que corresponde al juez de primer grado hacerse cargo de los elementos introducidos al juicio, analizarlos, aceptarlos o rechazarlos, no bastando la simple diferencia de opinión que los intervinientes puedan



tener acerca del convencimiento logrado a través de los indicios aportados, su entidad ni el rumbo de la certeza que pudiera generarse a partir de la forma en que se arriba a la decisión, precisándose solo que el juez haya hecho uso de la regla probatoria dentro del continente que la circunscribe.

En suma, si lo pretendido es modificar los hechos que quedaron establecidos en la sentencia, dicha situación pugna con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal y su sistema recursivo, pues es improcedente una revisión que altere la valoración o apreciación dada por los jueces a la prueba rendida, salvo que ésta sea contraria a las reglas establecidas en el artículo 297 del Código Procesal Penal, lo que en la especie no ocurre, ya que los jueces se pronunciaron clara, fundada y latamente sobre las razones que formaron su convicción; a lo que debe agregarse que el nuevo estándar de convicción condenatorio en materia penal, “más allá de toda duda razonable”, no exige certeza absoluta, ni promueve fórmula alguna de plena prueba que suprima por completo cualquier otra versión de aquella por la que se condena, lo cual deriva de la protección de la persona y los derechos del imputado, consagrados en el sistema procesal penal que persigue que las controversias sean expresadas, debatidas y resueltas en un ámbito de lógica adversarial.

**DÉCIMO NOVENO:** Tratándose de la configuración de una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, debe señalarse que su establecimiento incumbe en forma exclusiva y excluyente a los jueces del fondo, de suerte que mediando explicación razonada y amparada en los datos de la causa, no existe error de derecho, porque la labor de entender configurada una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal es una atribución especial de los jueces del grado, sobre ellos recae la obligación de definir el derecho aplicable a los acontecimientos de que conocen, en particular, las reglas legales relacionadas con una minorante de responsabilidad penal, de manera



que, como se dijo, mediando explicación razonada y amparada en los datos de la causa respecto de una materia que es de su especial prerrogativa, como la existente en el fallo, no concurre vicio alguno de nulidad, debiendo agregarse que ha sido reconocido por la Jurisprudencia que una conducta de colaboración implica, por un lado, un propósito serio y verdadero de contribuir en el desarrollo de la investigación y del juicio, es decir, tener una disposición subjetiva, y por otra parte, que este aporte sea efectivo para esclarecerlos, en términos que el tribunal pueda apreciarlo y calificarlo como sustancial, vale decir, que sea trascendente, lo que en autos no se advierte.

**VIGÉSIMO:** Restan los presupuestos de los ilícitos, y sobre ellos basta señalar que en la sentencia se explican latamente los elementos de ambos tipos penales y por qué concurren; y, tratándose de la menor extensión del mal causado, la sola lectura de la sentencia, su desarrollo y explicaciones, no dejan duda alguna acerca de la entidad del tráfico, de la asociación para cometerlo, y de la magnitud de la operación, de suerte que el tribunal, en uso de su facultad, podía perfectamente arribar a las condenas impuestas.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad deducidos por los abogados, sres. José López Pinto, y Cristian Olate Orellana, defensores penales privados, en contra de la sentencia dictada el cinco de diciembre último, en los autos RUC 2000243337-1, RIT 510-2023.

Regístrese, incorpórese al sistema, y dese a conocer a los intervinientes, sin perjuicio de su notificación por el estado diario.

Redacción de la Ministra señora Mónica Olivares Ojeda.

**RoI N° 8-2024 Penal.**





Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LQMJXXMPPX



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros sra. Mónica Olivares Ojeda, sr. Pedro Güiza Gutiérrez, sra. Marilyn Fredes Araya y sr. Andrés Provoste Valenzuela. No firman las Ministros sras. Olivares Ojeda y Fredes Araya, no obstante haber concurrido ambas a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal y con licencia médica, respectivamente. Iquique, doce de abril de dos mil veinticuatro.

En Iquique, a doce de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LQMJXMXMPPX